

LAS CLAVES

4,2%

del PIB británico es el compromiso de gasto acordado por Londres, cerca del 5% que exige la OTAN

MINISTRO DE DEFENSA

«La naturaleza de la guerra está cambiando» y hace necesario gastar en «tecnologías emergentes»

sistemas antidrones, nuevas capacidades para las fuerzas especiales y tecnologías destinadas a reforzar la protección frente a amenazas derivadas de la inteligencia artificial.

La estrategia también prevé elevar hasta 64.000 millones de libras (74.000 en euros) la inversión destinada a renovar la disuasión nuclear británica mediante nuevos submarinos, el desarrollo de una nueva generación de cabezas atómicas británicas y la adquisición de doce cazas F-35A.

Aporte a los aliados

En el ámbito internacional, el Reino Unido aportará además 400 millones de libras (464 en euros) al nuevo Mecanismo Multilateral de Defensa para financiar conjuntamente con sus aliados la adquisición de equipamiento militar. «Vamos un paso más allá con el Plan de Inversión en Defensa destinando 400 millones de libras a nuestra contribución al Mecanismo Multilateral de Defensa para financiar y adquirir material junto a nuestros aliados y avanzar hacia el cumplimiento de nuestros objetivos de gasto de la OTAN», explicó Keir Starmer.

El premier detalló que el año pasado, en la cumbre de la Alianza Atlántica, «me comprometí a destinar el 5% del PIB a nuestra seguridad en sentido amplio, incluyendo la seguridad energética y las infraestructuras críticas, además de la defensa. El plan de inversión que publicamos hoy nos sitúa ya en el 4,2% de ese compromiso», aseguró.

El acuerdo pone fin a meses de tensas negociaciones entre el Ministerio de Defensa y el Tesoro sobre la financiación del plan. La disputa, motivada por un déficit presupuestario estimado en unos 20.000 millones de euros, desembocó en la dimisión del anterior ministro de Defensa, John Healey, quien denunció que el proyecto no proporcionaba los recursos necesarios para afrontar el actual contexto internacional. Según medios británicos, su sucesor, Dan Jarvis, logró desbloquear las conversaciones tras negociar directamente con la ministra de Economía, Rachel Reeves, y lograr un incremento de la financiación prevista para el plan.



El número dos del partido de Le Pen, Jordan Bardella. AFP

La Fiscalía europea registra sedes de la ultraderecha en varios países, incluida España

La operación es fruto de una investigación por un presunto uso indebido de 4,33 millones de euros de la Eurocámara



ENRIC BONET
Corresponsal. Francia

Otra investigación judicial sacude la ultraderechista Agrupación Nacional de Francia (RN). Cuando apenas falta una semana para que se conozca la sentencia del juicio en apelación de Marine Le Pen, la Fiscalía europea registró ayer la sede de su partido en París en el marco de otro caso. La operación también tuvo lugar en España, Italia y Bélgica en oficinas relacionadas con el grupo nacionalista Identidad y Democracia, del que formó parte RN, la Liga de Matteo Salvini o el PVV del neerlandés Geert Wilders, ha informado esta tarde el diario 'Le Monde'.

«Actualmente, estamos llevando a cabo medidas de investigación en Francia y otros países europeos en el marco de un procedimiento en curso sobre el uso de fondos europeos por un exgrupo político del

Parlamento Europeo entre 2019 y 2024», indicó por la tarde la Fiscalía europea, confirmando la información del rotativo galo. Los dirigentes de Identidad y Democracia están siendo investigados por presuntamente «haber utilizado de manera indebida» más de 4,3 millones de euros de la Eurocámara durante la anterior legislatura.

Tras las elecciones europeas de 2024, ese grupo de la extrema derecha incorporó a nuevas formaciones, como Vox o el Fidesz del húngaro Viktor Orbán. Por consiguiente, este caso no afecta en principio al partido de Santiago Abascal, ya que durante el periodo investigado formaba parte del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, encabezado por Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

En concreto, la investigación en curso reprocha al partido de Le Pen y sus aliados que utilizaran de manera indebida los fondos de la UE en las donaciones a asociaciones afines (por un total de 700.000 euros). También le acusan de no haber respetado las normas de Estrasburgo y Bruselas con los contratos con empresas cercanas ideológicamente, al haberlos atribuido supuestamente sin haber hecho los concursos públicos exigidos por la nor-

mativa. Presuntamente, hasta 3,6 millones de euros pudieron haberse malversado de esa manera.

Defensa de la inocencia

«Están registrando varias sedes y los domicilios personales de proveedores de servicios de comunicación que trabajaron con nosotros. (...) No nos puedan reprochar nada y lo demostraremos», aseguró en la red social X el eurodiputado Jordan Bardella, número dos de los lepenistas. Los agentes de la Fiscalía continental tienen en su punto de mira a Paul-Alexandre Martin, fundador de la empresa de comunicación e-Politic y que se benefició de contratos onerosos por parte de Identidad y Democracia. Este empresario, cercano a Le Pen y Bardella, reside en Madrid desde 2022, por lo que su domicilio en España es posiblemente uno de los

lugares inspeccionados.

Estos registros han tenido lugar una semana antes de que se conozca el 7 de julio la sentencia a Le Pen y otros dirigentes de Agrupación Nacional por la malversación de más de tres millones de euros del Parlamento Europeo, a través de una trama de falsos asistentes entre 2004 y 2016. La líder de la derecha radical francesa se encuentra actualmente inhabilitada hasta 2030 por la condena en primera instancia por ese 'affaire'. Solo una sentencia absolutoria o una inhabilitación de un máximo de dos años le permitiría presentarse en las elecciones presidenciales, previstas para la primavera del año que viene.

Desde hace más de un año, Bardella, de 30 años, se prepara para sustituirla. En las últimas semanas, sin embargo, varias investigaciones han salpicado al joven eurodiputado, que por ahora no ha sido imputado. Antes de los registros de este martes, ya se había sabido a principios de mayo que lo investigaban por haber pagado con dinero europeo sus clases de oratoria. Según informó este martes el semanario de investigación 'Le Canard enchaîné', los magistrados abrirán otra investigación preliminar para saber si el referente de los lepenistas en Bruselas aportó en 2015 pruebas falsas para justificar su empleo como asistente parlamentario.

Estas tres investigaciones reflejan que los problemas con la justicia no solo son un dolor de muelas para Le Pen, sino también para su ambicioso número dos. Una presión judicial que se acentúa a medida que se acerca el 7 de julio. En esa fecha empezará oficiosamente la próxima carrera hacia el Eliseo.

LA CLAVE

ACUSACIÓN

Se sospecha que los partidos canalizaron fondos de la UE hacia asociaciones afines